



La remilitarización en Centroamérica: Un análisis comparativo y regional

Para Rockefeller Brothers Fund
Por IBI Consultants

Octubre 2023



Tabla de contenidos

Resumen ejecutivo.....	3
Introducción y marco de discusión	5
Metodología y finalidad del análisis	6
Política de Estados Unidos sobre corrupción y militarización en Centroamérica	8
Supervisión militar y civil	12
Historia, contexto regional y participación de Estados Unidos	16
La remilitarización y vínculos con la corrupción	18
Referencias	22

Resumen ejecutivo

Este informe es una antología de estudios que examinan los procesos de remilitarización en el Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) realizados por destacados investigadores académicos en cada país con el apoyo del Rockefeller Brothers Fund. En estos países, Estados Unidos es e históricamente ha sido un actor externo dominante. Como caso comparativo examinamos Nicaragua, más estrechamente alineada con Rusia. En todos los países, los militares habían gobernado directamente o a través de representantes civiles durante la mayor parte de los 150 años previos.

En la década de 1990, las negociaciones que pusieron fin a las tres guerras civiles de la región dieron los primeros pasos hacia reformas democráticas reales, permitiendo que Centroamérica se alejara de las guerras civiles, las luchas revolucionarias y las sangrientas batallas de poder de la Guerra Fría. Cada país se dedicó a la construcción de nuevas y frágiles instituciones democráticas liberales. Se entendió correctamente que las amplias reformas estructurales, constitucionales y doctrinales de las fuerzas armadas como institución eran fundamentales para construir sociedades más inclusivas y equitativas con instituciones funcionales regidas por el estado de derecho y sujetas a normas democráticas.

Hoy, esta base que alguna vez fue esperanzadora se está erosionando, alimentando el creciente autoritarismo y la crisis paralela de legitimidad, el aumento de los abusos contra los derechos humanos, la corrupción masiva, la desinstitucionalización y las olas de migración a los Estados Unidos y otros lugares para escapar del nuevo y destructivo regreso al pasado. Conduce cada vez más los escasos recursos hacia militares que no tienen una amenaza externa real que combatir

Ahora hay mucho en juego: está por verse si las fuerzas democráticas pueden recuperar de manera sostenible el terreno perdido contra las fuerzas militares y autoritarias que buscan regresar al pasado, o si los últimos 25 años de frágil progreso democrático son una anomalía histórica reversible que pudiera desaparecer.

A pesar de lo que está en juego, los legisladores estadounidenses y demás partes interesadas regionales apenas culpan a la remilitarización como una causa fundamental de la crisis de la región. La administración del presidente Biden ha revelado tres estrategias principales que podrían y deberían abordar el fenómeno, pero ninguna mencionó el regreso de los militares a roles prominentes en la seguridad interna, el desarrollo económico y la interferencia política como fomento del autoritarismo.

En todos los países, la situación actual culminó en acontecimientos decisivos que consolidaron el paradigma de la remilitarización. En cada punto de ruptura, los militares y las élites fortalecieron su alianza a través de la voluntad de cada lado de proteger al otro y así volver a tejer el viejo modelo. En cada caso, los militares cosecharon enormes beneficios económicos, con mayores presupuestos y con acceso a ganancias de sectores civiles clave para la economía.

No hay duda de que el Triángulo Norte enfrentó enormes desafíos de seguridad a lo largo de las primeras dos décadas del siglo 21 . La deportación masiva en la década de 1990 de centroamericanos que cumplieron condenas en Estados Unidos a sus países de origen fue un factor clave. Como se describe en los estudios, los gobiernos de la posguerra inmediatamente empoderaron

a los militares para abordar estos desafíos, en lugar de abordar las causas fundamentales de la violencia a través de la lente de reformas incompletas, una marcada falta de voluntad política, una creciente corrupción y la falta de recursos de actores clave, no militares, como la policía civil, la reforma penitenciaria, la reforma judicial y las instituciones anticorrupción.

En cada caso, los militares fueron llamados de nuevo a asumir funciones de seguridad interna a pesar de las nuevas reformas. Inicialmente, la intervención militar estaba, al menos, nominalmente bajo el mando de agentes de la policía civil. Con el tiempo, los militares – a menudo con el estímulo y financiamiento de los Estados Unidos para apoyar las misiones antinarcoóticos– se volvieron dominantes.

La dependencia en la milicia en lugar de abordar los problemas socioeconómicos subyacentes ha llevado a una política impulsada por el entendimiento de que las soluciones a los crecientes problemas sociales y las altas tasas de criminalidad son un problema de ocupación territorial por parte de las fuerzas estatales, lo que lleva a más violencia y minimiza el impacto potencial de las iniciativas políticas no violentas.

En El Salvador vemos que los militares desempeñan un papel clave e inconstitucional en las detenciones masivas de 53.000 presuntos pandilleros llevadas a cabo durante el Estado de Excepción en curso instaurado por el presidente Nayib Bukele en marzo de 2022. En un momento de profunda depresión económica y colapso por la pandemia de COVID, el ejército está viendo aumentos históricos en su presupuesto y personal, mientras que el, ahora servil, sistema judicial, cierra arbitrariamente los casos de abusos históricos contra los derechos humanos que implican a los militares.

En Guatemala, el mayor papel e influencia de los militares afecta desproporcionadamente a las comunidades indígenas y municipios que viven cerca de minas comerciales operadas por extranjeros, beneficiando a la élite política, como se ejemplifica en el estado de sitio impuesto a El Estor, Izabal. También afecta a las comunidades que viven en áreas con una presencia significativa del narcotráfico.

En Honduras, la mayor dependencia de los militares para responder a los desafíos de seguridad pública afecta desproporcionadamente a las comunidades en Gracias a Dios, Olancho y a lo largo del Mar Caribe, donde el narcotráfico prospera junto con la alta concentración de posesión de tierras. Las comunidades indígenas y los activistas ambientales enfrentan grandes amenazas mientras abogan por los derechos a la tierra ganados con mucho esfuerzo contra los deseos del grupo oligárquico de la región. La violencia sistémica de los militares contra las mujeres y el acoso dirigido a las personas LGBTQ+ es visible en la zona.

En Nicaragua, el principal aliado del régimen, Rusia, ha adoptado plenamente las prácticas autoritarias de la familia Ortega y ha proporcionado armas y equipo de inteligencia para mantener al régimen en el poder mediante el uso de la fuerza. Las fuerzas armadas son parte clave de la represión generalizada además de que llevan a cabo una extracción económica depredadora en las industrias minera, maderera y pesquera como pago por su lealtad al régimen.

Como muestran los investigadores en estos estudios, la región está cerca de un punto de inflexión más allá del cual tratar de recuperar incluso los más frágiles y defectuosos procesos democráticos se llevará décadas y enormes recursos. Esto no solo sería una tragedia para la región, que aún se está

recuperando de los conflictos que desgarraron a sus sociedades, sino también para los intereses estratégicos de Estados Unidos y la estabilidad del hemisferio occidental.

Cuando la tendencia de hacer retroceder la influencia militar estaba en aumento, esta creció hasta engullir la mayor parte del hemisferio. Lo opuesto también es cierto. A medida que Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala regresen a las estructuras del pasado, se aprenderán lecciones, lo que supone una tragedia inminente que debe abordarse en todos los niveles, ya sea a nivel local, nacional y más allá.

Introducción y marco de discusión

Hace tres décadas, Centroamérica se embarcó en un giro histórico lejos de las guerras civiles, los secretos revolucionarios y las sangrientas batallas de poder de la Guerra Fría. En cambio, cada país recurrió a la construcción de nuevos y frágiles sistemas de gobernanza democrática liberal. La esperanza era que los años de guerra y más de un siglo en que las élites económicas ejercieron el dominio político a través de gobiernos militares y de represión cederían a sistemas más abiertos, inclusivos, estables y participativos. Se supone que los nuevos caminos históricos marcarán el comienzo de la esperanza y la oportunidad de un crecimiento económico equitativo. En los países que examinamos en este informe – El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua – los militares habían gobernado directamente o a través de representantes civiles durante la mayor parte de los 150 años anteriores.

Las fuerzas armadas pudieron mantener el control del poder durante décadas a través de una relación simbiótica con los pequeños grupos con poder económico cuyos intereses protegían los militares. Estos dos bloques combinaron sus intereses comunes con el interés nacional del país, ignorando el bien mayor de la población. Este modelo de gobernanza creó una tenue estabilidad a través de la represión y la disparidad económica extrema que finalmente estalló en las sangrientas guerras civiles de la región en la década de 1980.

En la década de 1990, las negociaciones que pusieron fin a las tres guerras civiles de la región dieron los primeros pasos hacia verdaderas reformas democráticas. Lo más importante es que muchas reformas fueron escritas específicamente para frenar el papel de los militares en cada país, recortando drásticamente sus presupuestos, tamaño, prerrogativas económicas e influencia política. Las amplias reformas estructurales, constitucionales y doctrinales a las fuerzas armadas como institución se entendieron correctamente como fundamentales para construir sociedades más inclusivas y equitativas con instituciones funcionales regidas por el estado de derecho y sujetas a normas democráticas.

Hoy, esta base que alguna vez fue esperanzadora, se está erosionando rápidamente a lo largo del espectro político, desde el autoproclamado socialismo en Nicaragua hasta el gobierno de derecha en Guatemala y el populismo ideológicamente agnóstico en El Salvador. Esta erosión está alimentando el creciente autoritarismo y la crisis paralela de legitimidad, el aumento de los abusos contra los derechos humanos, la corrupción masiva, la desinstitucionalización y las olas de migración a los

Estados Unidos y otros lugares para escapar del nuevo y destructivo retorno al pasado. Se impulsa cada vez más la asignación de recursos escasos a los ejércitos que no enfrentan ninguna amenaza externa creíble contra la cual defenderse.

Lo que está en juego ahora es tremendamente importante. Lo que se encuentra en la balanza es si las fuerzas democráticas pueden recuperar el terreno perdido contra las fuerzas militares y autoritarias que buscan regresar al pasado, o si los últimos 25 años de frágil progreso democrático, nacidos tras devastadoras guerras civiles, han demostrado ser una anomalía histórica reversible que pudiera desaparecer.

A pesar de lo que está en juego, los legisladores estadounidenses y otras partes interesadas apenas mencionan a la remilitarización como una causa fundamental de la desestabilización de la región. Los impulsores comúnmente identificados de la violencia, la desigualdad económica, la exclusión social, la falta de oportunidades y la inseguridad son válidos. Pero un elemento clave que paraliza el progreso significativo y ahoga las instituciones democráticas es el regreso de los militares a su alianza con las élites históricas y sus aliados políticos. Esta alianza, profundamente arraigada, reconoce que las instituciones democráticas reales que trabajan juntas para gobernar por el interés público son una amenaza existencial para las élites y el privilegio histórico de sus aliados y el cuasi monopolio de los recursos del país.

Metodología y propósito del análisis

Este informe es una antología de estudios de investigación escritos por destacados investigadores académicos de cada país para el Rockefeller Brothers Fund, que examinan los procesos de remilitarización en el Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras), donde Estados Unidos es e históricamente ha sido un actor externo dominante. También examinamos a Nicaragua y su estrecha alineación con Rusia.

El propósito es proporcionar un análisis de la remilitarización en Centroamérica desde una perspectiva centroamericana, utilizando una variedad de puntos de vista sobre los diferentes contextos que enfrenta cada país y diversos sectores de la sociedad civil, complementado por una visión general de los temas comunes y la política de los Estados Unidos en la región. Cada capítulo presenta un informe detallado del país con análisis de investigadores expertos del país, datos y perspectivas de personas que han trabajado o monitoreado las tendencias de seguridad regional durante décadas.

El apoyo del RBF también proporcionó un recurso regional clave: una oportunidad para crear una comunidad de investigadores para aprender unos de otros y discutir de manera segura los temas comunes y los desarrollos únicos de cada país. Esto es vital en un momento en que la libertad académica se está restringiendo drásticamente y en el que las personas que llevan a cabo investigaciones corren el riesgo de ser encarceladas y censuradas. Debido a esto, nuestros investigadores principales en El Salvador y Nicaragua no se les menciona como autores a pesar de su excelente trabajo.

Como un estudio de caso comparativo con los tres aliados de larga data de los Estados Unidos en el Triángulo Norte, el informe analiza la remilitarización en Nicaragua para evaluar un proceso en el que Estados Unidos está mucho menos involucrado. La administración Reagan financió la

insurgencia de los Contras, y los Estados Unidos tuvieron una fuerte presencia durante la primera década de la posguerra, pero han tenido poca influencia durante los últimos 15 años. Durante el conflicto armado allí, la Unión Soviética y Cuba desempeñaron un papel importante en el apoyo al gobierno revolucionario del Frente Sandinista. La alianza actual del régimen con Rusia juega un papel importante en el apoyo a la consolidación del régimen más autoritario de la región y el empoderamiento de sus militares para reprimir cualquier disidencia y encarcelar a cientos de líderes y activistas de la oposición.

Los temas regionales y la respuesta política de los Estados Unidos a esos temas, que discutimos aquí, son ilustrativos de importantes puntos en común entre los estudios de los países en esta antología. Si bien existen muchas diferencias en cómo se manifiesta este proceso en cada país, también se utilizan patrones claros y tácticas comunes que muestran que hay un patrón más amplio de regresión democrática en marcha.

Por ejemplo, como se documenta en estos estudios, en cada país, partes significativas del presupuesto militar ahora se esconden del público. Los funcionarios hacen esto clasificándolo como secreto a pesar de que por ley no debería serlo y simplemente no lo reportan, aunque la ley exige la presentación de informes financieros; u omitir importantes flujos de ingresos que terminan en las arcas militares después de ser transferidos a través de otras instituciones gubernamentales. Incluso con estas enormes brechas de datos, los presupuestos militares formales en toda la región están aumentando rápidamente a pesar de que no existe una amenaza externa a la soberanía nacional.

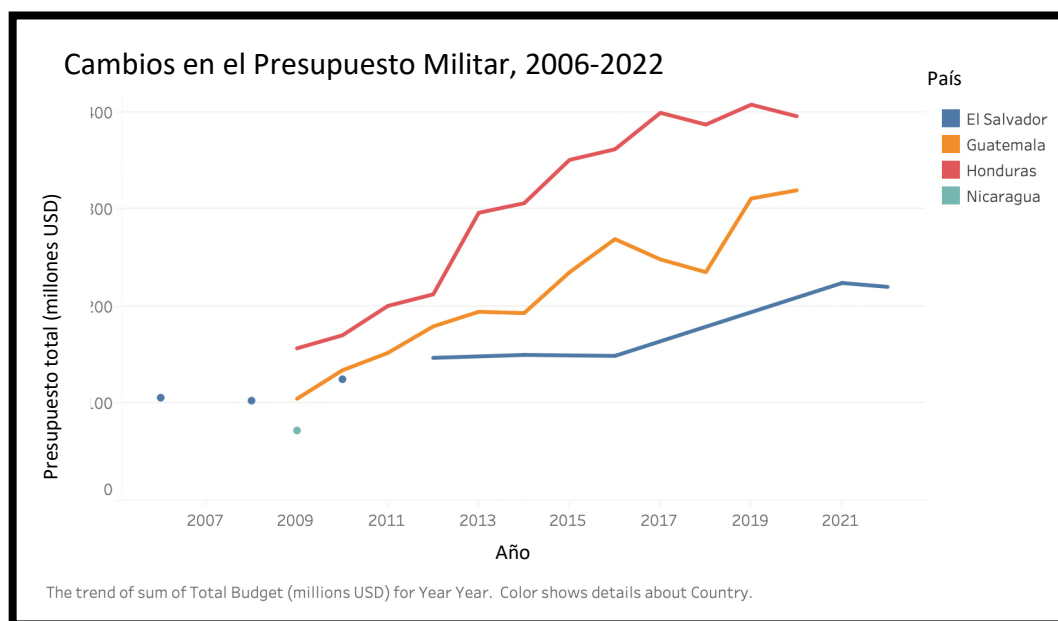


Figura 1: Presupuestos militares reportados oficialmente año tras año. Los informes oficiales a menudo omiten importantes flujos de ingresos (compilado por IBI Consultants)

Para aquellos individuos e instituciones involucrados en el análisis de políticas, diplomacia, ayuda exterior o coordinación regional, podría ser útil una comprensión más amplia de los temas comunes

en el contexto de la historia de la región. El análisis de las tendencias comunes puede ayudar a los responsables de la toma de decisiones a comprender qué fuerzas son mayores que cualquier institución o país específico y se podría requerir de una coordinación más amplia que involucre a los organismos reguladores internacionales, así como a los grupos locales o nacionales de la sociedad civil.

En todos los casos, la situación actual representa un proceso acumulativo. Las advertencias iniciales fueron minimizadas, y las acciones ilegales de los militares racionalizadas o ignoradas, lo que llevó a algunos actores envalentonados a llevar a cabo acciones específicas e identificables que marcan una consolidación del paradigma de la remilitarización. En cada punto de ruptura, la alianza entre los militares y las élites económico-políticas se fortalece a través de la voluntad de cada lado de proteger al otro y recuperar el viejo modelo de gobierno.

La falta de un análisis transversal y estudio comparativo es evidente en el estado actual de la política de Estados Unidos hacia la región. La administración del presidente Biden ha revelado estrategias que podrían y deberían abordar la remilitarización como un factor clave que impulsa la crisis regional. Sin embargo, una de las principales iniciativas políticas incluso mencionó el regreso de los militares a roles prominentes en la seguridad interna, el desarrollo económico y la interferencia política como una causa fundamental del nuevo modo autoritario que se está enraizando en la región. Además de las declaraciones formales de estrategia, la Lista Engel, requerida por el Congreso para sancionar a los actores corruptos y antidemocráticos, apenas toca a la cúpula militar.

Política de Estados Unidos sobre la corrupción y la militarización en Centroamérica

Los Estados Unidos desempeñaron un papel muy importante para armar, adiestrar y financiar a múltiples grupos durante los conflictos armados de la década de 1980. Con el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos, bajo múltiples presidencias, se convirtió en el principal actor externo que financió esfuerzos, a menudo defectuosos, para reformar los ejércitos y desarrollar instituciones democráticas para satisfacer el frágil progreso que se logró en la década de 1990. La influencia regional de los Estados Unidos ha disminuido drásticamente en los últimos años y la política actual no ha logrado comprender y enfrentar la creciente militarización y autoritarismo de manera coherente y efectiva.

Un ejemplo clave de esto radica en las designaciones de la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos en Centroamérica publicadas por primera vez por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en julio de 2021 y actualizadas en julio de 2022. El primer informe, formalmente conocido como el *Informe de Actores Corruptos y Antidemocráticos de la Sección 353* del Departamento de Estado, fue creado para nombrar, avergonzar y revocar las visas de líderes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua que han sido acusados de corrupción y de socavar la democracia en la región. Por lo tanto, proporciona una perspectiva importante con respecto a la conciencia de los Estados Unidos sobre la corrupción en la región, un enfoque que parece centrarse en las administraciones políticas, el poder judicial y el congreso.

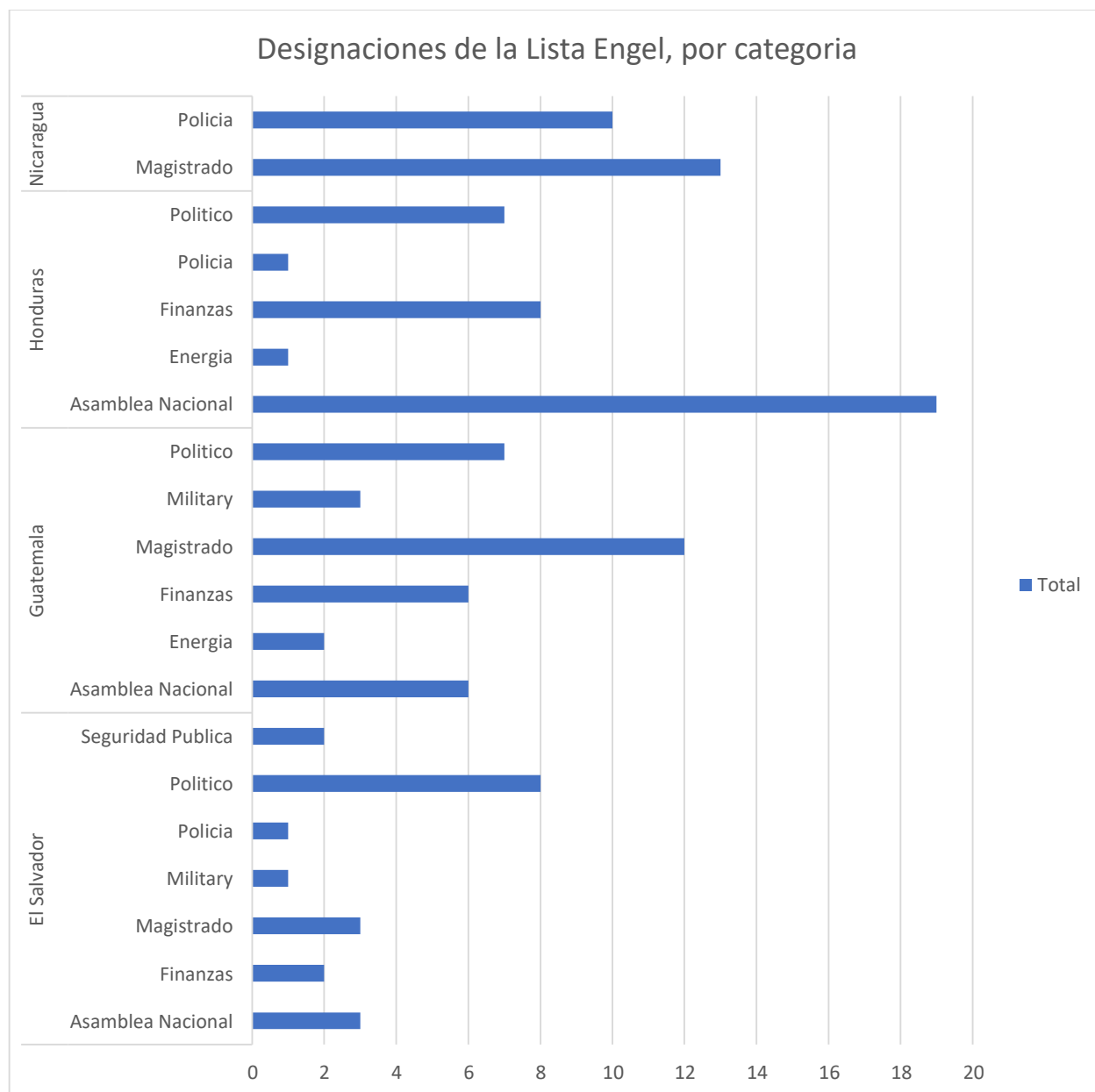


Figura 2: Designaciones de la Lista Engel, Centroamérica

El ejército no surge aquí como una prioridad para los Estados Unidos y sus socios. Un total de 115 personas fueron nombradas en las múltiples iteraciones de la lista y solo cuatro tienen vínculos directos con el ejército. Estas cuatro personas han sido señaladas por abusos cometidos en el pasado. Otras personas señaladas tienen vínculos con la "seguridad pública", una categoría que generalmente hace referencia a su afiliación militar y/o policial.

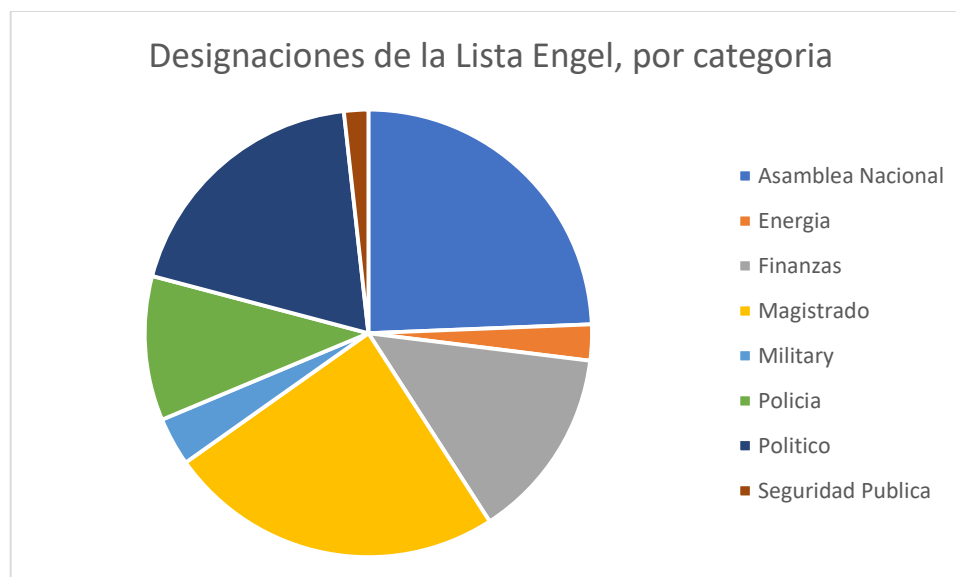


Figura 3: Designaciones de la Lista Engel por categoría de funcionario

Uno de los autores argumenta correctamente que, en muchos sentidos, el término remilitarización es engañoso porque implica una verdadera *desmilitarización* como punto de partida de la discusión. En realidad, cada país aludido experimentó diferentes grados de desmilitarización, es decir, la eliminación de los militares como actores políticos y actores económicos, y su alineación para la defensa de la nación contra actores externos y permanecer al servicio de la nación.

Este objetivo nunca se logró plenamente, pero como señalan los autores de los informes sobre El Salvador y Nicaragua, ambos países lograron avances significativos hacia ese objetivo. La mayoría de esos logros ya se han borrado. En ambos países, los militares conservaron una influencia significativa como centros de poder paralelos bajo el mando civil a través de un sistema integrado de recopilación de inteligencia, contactos de seguridad interna y aliados políticos.

La administración del presidente Biden consideró correctamente a la corrupción como un "interés central de seguridad nacional" en la *Estrategia de los Estados Unidos para Combatir la Corrupción* de diciembre de 2021 (La Casa Blanca 2021), señalando que

En el mundo globalizado de hoy, los actores corruptos sobornan a través de las fronteras, aprovechan el sistema financiero internacional para esconder riqueza ilícita en el extranjero y abusan de las instituciones democráticas para promover medios antidemocráticos. ...La corrupción amenaza la seguridad nacional de los Estados Unidos, la equidad económica, los esfuerzos mundiales contra la pobreza y el desarrollo, y la democracia misma.

Si bien esta estrategia abordó muchos problemas en Centroamérica, las alianzas de corrupción entre los militares y sus aliados económicos y políticos, y el enorme gasto de los escasos recursos nacionales que esto genera, no se mencionaron, como se muestra con las Listas Engel. Esta ausencia fue particularmente evidente dados los cargos por narcotráfico y la orden de extradición presentada contra Juan Orlando Hernández, el presidente de larga data de Honduras y aliado de Estados Unidos, cuya alianza bien documentada con los militares fue crucial para mantener su control sobre el poder.

La *Estrategia de los Estados Unidos para combatir la corrupción* siguió a la publicación, en julio de 2021, de la *Estrategia de los Estados Unidos para abordar las causas fundamentales de la migración en Centroamérica*, encabezada por la vicepresidenta Kamala Harris (Consejo de Seguridad Nacional 2021), diseñada para abordar los impulsores de la migración. La estrategia establece que "nuestra estrategia es de largo alcance y se centra en nuestras asociaciones con otros gobiernos, instituciones internacionales, empresas, fundaciones y la sociedad civil".

El "estado final deseado" de la estrategia es "una Centroamérica democrática, próspera y segura, donde las personas avancen económicamente, vivan, trabajen y aprendan con seguridad y dignidad, contribuyan y se beneficien del proceso democrático, tengan confianza en las instituciones públicas y disfruten de oportunidades para crear futuros para ellos y sus familias".

Ninguno de estos objetivos es alcanzable bajo gobiernos autoritarios apoyados por ejércitos que operan mucho más allá de los límites de las normas de un gobierno democrático. Sin embargo, notablemente ausentes de nuevo de la lista de actores o causantes, está el ejército.

La única mención de las fuerzas armadas fue la promesa de la administración del presidente Biden de "trabajar con los gobiernos para que la policía civil tenga los recursos y la capacidad de asumir la plena responsabilidad de la seguridad civil, permitiendo la reducción del ejército en los roles policiales". (Consejo de Seguridad Nacional 2021). Esa es una expectativa poco realista dado el cambio significativo de recursos hacia los militares en toda la región en los últimos años.

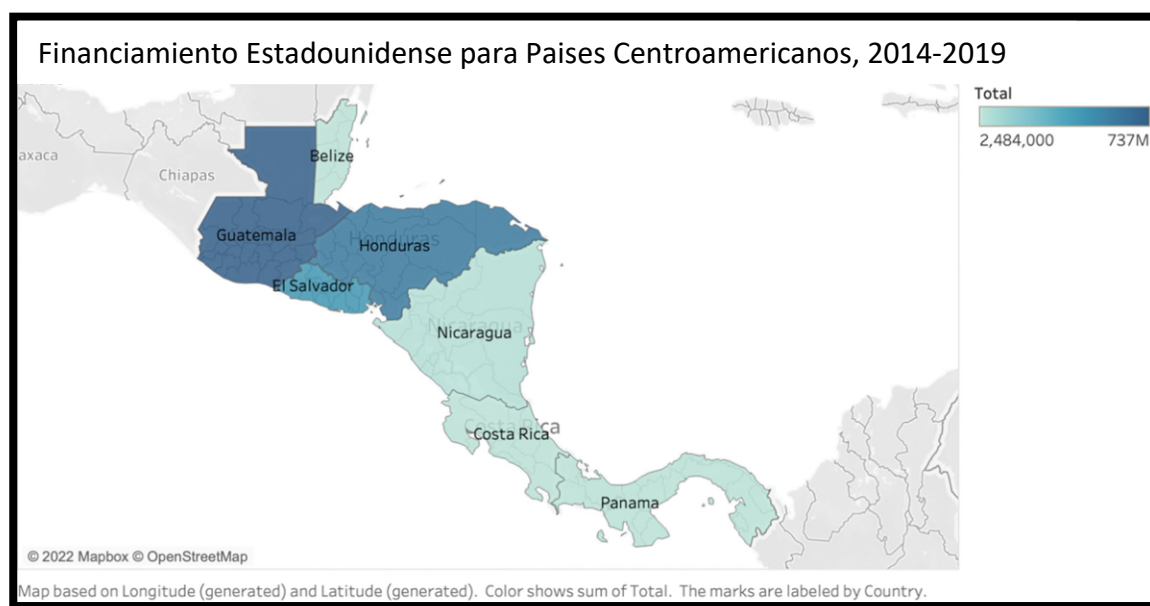


Figura 4: Cifras de ayuda de EE.UU. basadas en datos de WOLA.

En octubre de 2022, la administración del presidente Biden dio a conocer su nueva Estrategia de Seguridad Nacional, donde se describen las prioridades de seguridad e intereses estratégicos de los Estados Unidos. El documento establece que "ninguna región impacta a Estados Unidos más directamente que el hemisferio occidental", y promete "ayudar a los socios que enfrentan amenazas a la seguridad" de pandillas y organizaciones criminales transnacionales colaborando para ayudar a "la

policía civil y fortalecer los sistemas de justicia en las Américas, y ampliar el intercambio de información con nuestros socios". (Estrategia de Seguridad Nacional 2022). Una vez más, no hay una sola mención de la ola de remilitarización que es clave para socavar el objetivo clave de compartir la seguridad y los beneficios económicos basados en la "estabilidad democrática y las instituciones" de la región.

Los militares y la supervisión civil

No hay duda de que el Triángulo Norte enfrentó enormes desafíos de seguridad a lo largo de las primeras dos décadas del siglo 21. La deportación masiva de pandilleros y criminales peligrosos, quienes cumplieron condenas en los Estados Unidos, a sus países de origen en Centroamérica a mediados de la década de 1990 - justo cuando cada país estaba emergiendo de más de una década de conflicto civil- fue un factor clave. Ninguno de los países tenía sistemas judiciales independientes que funcionaran. Las fuerzas de la política eran nuevas, débiles y no comprobadas. (Arana 2005; Ribando Seelke 2016).

Los desafíos que presentan las pandillas, junto con el surgimiento de los países del Triángulo Norte de Honduras y Guatemala como nodos clave en las estructuras regionales de tráfico de cocaína y la violencia que los acompaña, fueron vistos en gran medida como inmanejables por las instituciones democráticas recién creadas. (Farah y Babineau, 2018).

Como se describe en los estudios, en lugar de abordar las causas profundas de la violencia vistas a través de la lente de reformas incompletas, una marcada falta de voluntad política, una creciente corrupción y la falta de recursos de actores no militares clave (policía civil, reforma penitenciaria, reforma judicial, instituciones anticorrupción), los gobiernos de posguerra inmediatamente volvieron a empoderar a los militares.

En cada caso, los militares fueron llamados de nuevo a desempeñar funciones de seguridad interna a pesar de las nuevas reformas, inicialmente por períodos cortos (30 días a 90 días) y al menos supuestamente bajo el mando de oficiales de la policía civil. Con el tiempo, estos se desdibujaron hasta borrarse totalmente y los militares -a menudo con el estímulo y la financiación de los Estados Unidos bajo las autoridades para apoyar en las misiones antinarcóticos- se volvieron dominantes. Como se describe a continuación, en cada caso hubo eventos precipitantes significativos que permitieron la consolidación de la expansión de los roles de los militares.

Con el fin de hacer que el resurgimiento de los militares fuera más difícil de revertir, en cada país los crecientes roles de las fuerzas armadas se están codificando en la ley, incluso cuando al hacerlo se viole la constitución. Este proceso es posible gracias al creciente apoyo de los militares a las estructuras judiciales cooptadas que ahora responden directamente a las directivas presidenciales en lugar de a las resoluciones judiciales independientes. El cambio de lealtades de la fidelidad a la constitución y las instituciones a las lealtades personales se refleja en la obediencia obsequiosa y la cuasi deificación del presidente y las élites económicas transmitidas repetidamente a través de declaraciones públicas y redes sociales por parte de los líderes militares.

Actualmente, los ejércitos de los cuatro países están reclamando la primacía en asuntos de seguridad nacional mientras vuelven a forjar esferas económicas y políticas de dominio, aliándose con las élites políticas y económicas en un pacto tácito para proteger mutuamente los intereses de cada uno. Se

trata de un regreso al viejo modelo de gobernanza que garantiza la impunidad de la estructura de gobierno. El estado final deseado no es simplemente la militarización en sí, sino el control social vinculado al control político y económico y al uso de la fuerza para volver al modelo histórico en lugar de permitir un cambio real.

El proceso de remilitarización requirió que los gobiernos cedieran continuamente las prerrogativas civiles a los militares. En cada país, el ejército ahora va más allá de sus mandatos constitucionales explícitos para involucrarse directamente no solo en asuntos de seguridad interna, sino también en agencias civiles y en el sistema judicial. Esta participación intersectorial a veces toma la forma de participación en contratos lucrativos, o en la colocación de miembros clave, quienes son leales al ejército y a sus intereses, en posiciones de influencia para buscar oportunidades rentables, o amenazas y violencia.

Penetrar otros sectores a menudo paga dividendos literales para el liderazgo militar. Por ejemplo, en El Salvador, por ley, las agencias gubernamentales que solicitan protección militar o apoyo para programas o proyectos específicos deben pagar a los militares con sus propios presupuestos, inflando en gran medida los presupuestos militares reales de maneras que no son capturadas por los documentos de finanzas públicas.

Los militares están ahora involucrados en sectores económicos mucho más allá de su ámbito constitucional. En Honduras, el ejército está involucrado en la agricultura a gran escala, productos farmacéuticos, administración de tierras y la Secretaría de Gobernación. En El Salvador, los militares ahora están a cargo de la atención médica y las vacunas, la educación, la distribución de alimentos y el sistema escolar para entregar libros y computadoras. En Guatemala, las tropas se despliegan con frecuencia para resolver disputas relacionadas con la minería, la propiedad de la tierra y los disturbios civiles, a menudo actuando contra las comunidades locales. En Nicaragua, el ejército está involucrado en la minería, la extracción de madera, la banca y otras funciones gubernamentales primarias. Esto es particularmente preocupante dado que todos estos países tienen un PIB modesto y una capacidad limitada para aumentar el gasto social. Cuando se llega a gastar en estos programas, los militares reciben una parte.

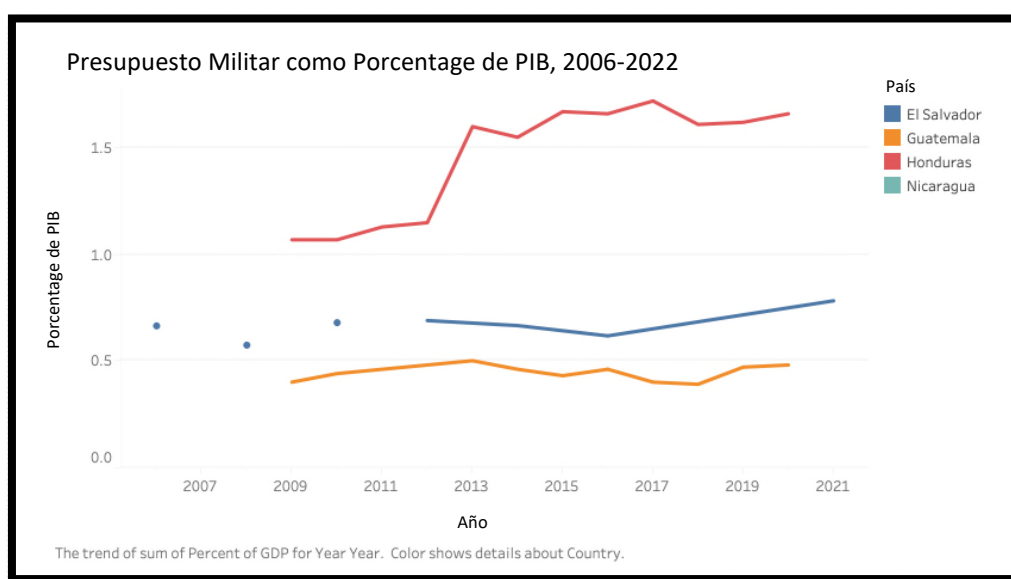


Figura 5: Presupuestos militares reportados públicamente como porcentaje del PIB (compilados por IBI Consultants)

Si bien algunos de los actores de esta alianza son nuevos, con algunas élites tradicionales ahora relegadas a roles menores, la nueva generación no ha reemplazado el modelo que permitió a sus predecesores cosechar enormes beneficios, mientras que la mayoría de los ciudadanos de los países permanecen atrapados en la pobreza endémica, los ciclos de violencia y migración, y el silencio político. Si bien los rostros de los gobiernos son civiles (a menudo rodeados por los militares), los militares están emergiendo nuevamente como garantes de la estabilidad basada en el uso de la fuerza, lo que requiere el autoritarismo que ahora florece en toda la región.

Uno de los resultados de la remilitarización es la creciente tendencia a retener lo que por ley debería ser información pública. Esto incluye presupuestos militares, acciones legislativas y una contabilidad de cómo se gastó el dinero asignado. Los datos confiables en estas áreas han desaparecido casi por completo en toda la región, donde casi todos los asuntos presupuestarios ahora se clasifican como "clasificados", lo que significa que pueden mantenerse en secreto hasta por siete años. Esto deja enormes lagunas en la capacidad de cuantificar y medir, más allá de la información anecdótica y fragmentaria.

Al mismo tiempo, el monitoreo de los flujos de ayuda estadounidense a la región en apoyo de las actividades militares y policiales también se ha vuelto mucho menos accesible y menos claramente delineado en los informes públicos. Las partidas antes claras y la contabilidad de las asignaciones se han vuelto más borrosas, menos desagregadas y, aunque están disponibles para el Congreso, a menudo no se publican en sitios públicos. El resultado neto es una menor supervisión y rendición de cuentas de los fondos estadounidenses, incluso cuando los ejércitos de la región se vuelven más poderosos. Las cifras más recientes recopiladas por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), que ha monitoreado el flujo de ayuda durante tres décadas, solo llegan hasta 2019 (ver el cuadro a continuación, basado en las cifras de WOLA).

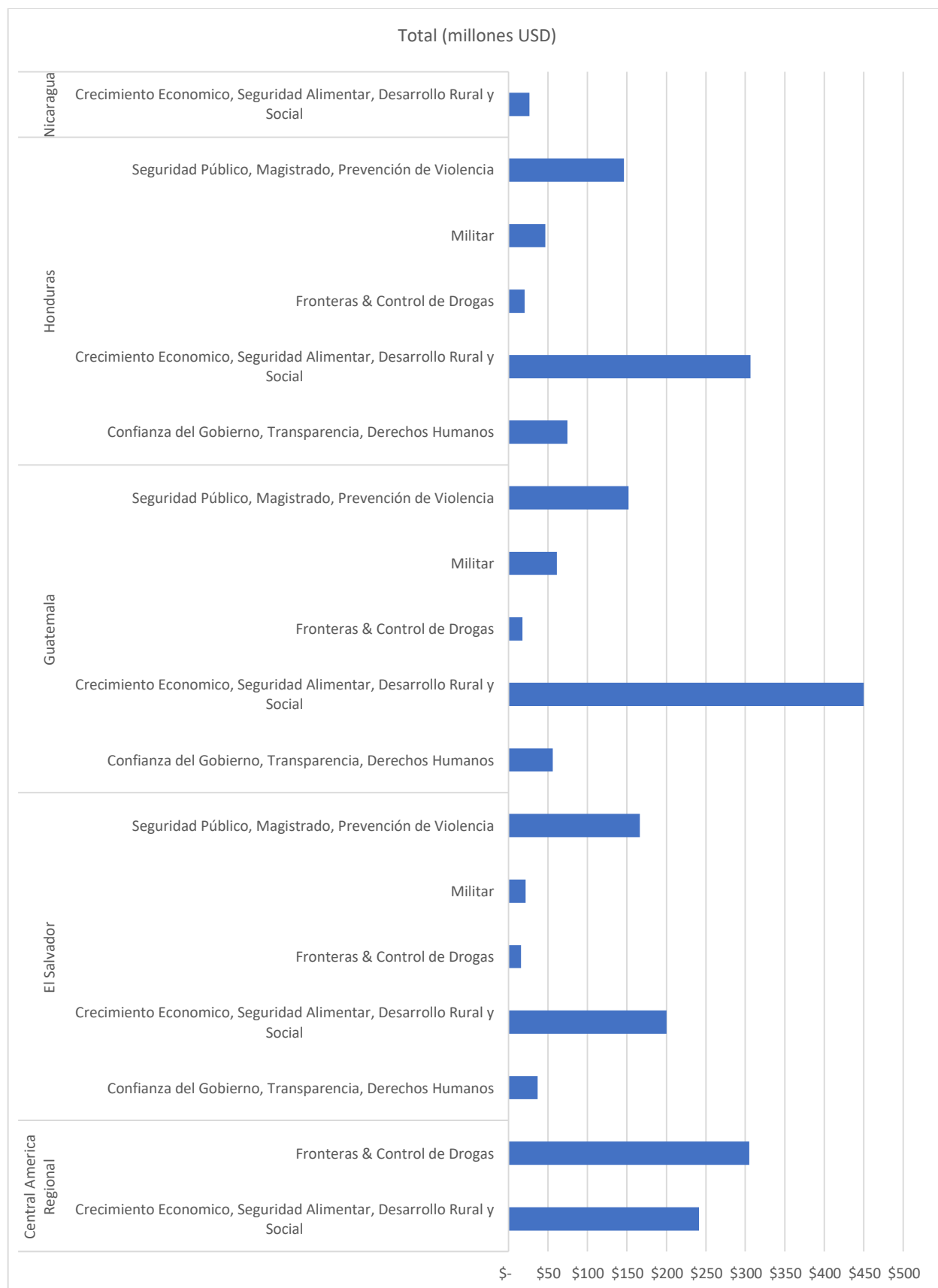


Figura 6: Financiamiento de Estados Unidos para Centroamérica, basado en datos de WOLA

Historia, contexto regional y participación de Estados Unidos

El modelo histórico excluyente y represivo de los primeros 150 años de independencia de España de la región fue interrumpido por la insurrección armada y las guerras civiles durante la década de 1980. El objetivo central de los tres acuerdos de paz negociados que pusieron fin a las hostilidades en El Salvador, Nicaragua y Guatemala fue crear estructuras de poder más inclusivas con instituciones democráticas formales y funcionales. Estas nuevas estructuras de poder esperarían, al menos sobre el papel, dejar obsoleto el modelo histórico y potenciar la creación de nuevas sociedades donde la revolución violenta no se viera como un remedio necesario y quizás único para abordar problemas sociales profundamente arraigados.

Algo fundamental para esta tarea fue eliminar a los militares, el árbitro final del poder real, del poder político y económico nacional, al tiempo que restringía severamente la capacidad de la institución para llevar a cabo operaciones de seguridad interna. La doctrina dominante durante mucho tiempo de establecer al ejército como un baluarte contra los enemigos internos basada en la doctrina anticomunista fue suplantada, al menos en teoría, por la creación de fuerzas policiales civiles para llevar a cabo funciones de seguridad interna e inteligencia para el estado. Tanto en El Salvador como en Guatemala, un factor clave en los procesos de paz para cada país después de sus guerras civiles implicó el desarrollo de una fuerza policial civil encargada de manejar las amenazas a la seguridad interna, las estructuras de inteligencia nacional y la seguridad fronteriza, lo que redefiniría radicalmente la declaración de la misión militar. La reinterpretación emergente de la misión militar en un retorno explícito a la defensa contra los enemigos internos, se aleja de las normas democráticas definidas constitucionalmente, lo que representa una violación de la confianza pública y una regresión de las normas democráticas.

La misión principal de los militares, de acuerdo con las nuevas constituciones de El Salvador, Nicaragua y Guatemala, era defenderse de los enemigos externos. En raros momentos de disturbios que representarían una amenaza existencial para el Estado, las constituciones dejaron abierta la posibilidad de que los militares pudieran desempeñar un papel de apoyo en el mantenimiento del orden nacional durante un tiempo limitado y específico, en apoyo de las instituciones civiles.

Sin embargo, la mayoría de las leyes aprobadas desde estas reformas hicieron poco para reforzar estas misiones u otras restricciones democráticas. En cambio, las nuevas leyes que rigen a los militares son extremadamente genéricas, dejando lagunas y un lenguaje vago que permite a los militares y sus aliados políticos definir los parámetros de las intervenciones, que ahora ocurren a un ritmo cada vez más veloz. Otras veces, las leyes y decretos codifican una amplia participación militar en diferentes sectores del gobierno, particularmente en Honduras y El Salvador. Una palabra utilizada con frecuencia por todos los autores para describir el impacto del marco legal en la militarización en la región es *protagonismo*, o la capacidad de la ley para remodelar el contexto para establecer a los militares como el "protagonista" autorizado en una variedad de contextos diferentes.

El retorno al viejo modelo está casi totalmente consolidado en Nicaragua, mientras que los gobiernos de El Salvador y Guatemala se están moviendo rápidamente para cimentar esta regresión histórica de la gobernabilidad democrática. En Honduras, bajo el nuevo y autoproclamado gobierno reformista de Xiomara Castro, la consolidación pende de un hilo, y sus elecciones determinarán en parte si el proceso ocurrirá y cómo. Las primeras señales no son alentadoras.

En cada país, la situación actual no es el resultado de una sola decisión o un cambio repentino en el modelo de gobernanza. Más bien, representa la culminación de más de una década de pequeños pasos que han llevado al punto de inflexión que enfrenta ahora la región. En cada caso, los autores identifican al menos un momento significativo de fractura en el movimiento hacia una reforma real y el empoderamiento de los militares que ahora se está acelerando. Los casos se detallan en los capítulos respectivos, pero un breve resumen ilustra las fracturas que ocurrieron sin consecuencias.

En El Salvador, el regreso de los militares a múltiples funciones de seguridad interna fue, irónicamente, parte de una serie de políticas emprendidas por el primer gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la fuerza insurgente más efectiva de la región que había luchado contra los militares hasta un empate virtual a lo largo de 12 años. Frente a una crisis de violencia relacionada con pandillas y nuevas redes criminales transnacionales, el gobierno del presidente Mauricio Funes (2009-2014) apoyó el nombramiento inconstitucional de un oficial militar retirado como jefe de seguridad interna y otros militares en altos puestos civiles y acogió el uso de los militares en la fallida política de "mano dura" de combatir a las pandillas.

El presidente Nayib Bukele llevó el proceso aún más lejos, emitiendo órdenes para que los militares enviaran tropas fuertemente armadas para ocupar la Asamblea Legislativa Nacional el 9 de febrero de 2020, porque la legislatura no aprobó una solicitud de préstamo que quería aumentar el gasto en seguridad, beneficiando directamente a los militares. Él y los militares sufrieron pocas repercusiones negativas debido a esta acción. Bukele elogió a los militares y ha trabajado incansablemente desde entonces para aumentar su presupuesto, tamaño y poder. Este proceso culminó con la detención, con el apoyo de los militares, de unas 53.000 personas desde marzo de 2022 bajo un "estado de excepción" que suspende muchas garantías constitucionales. Los arrestados como presuntos pandilleros son identificados como enemigos del Estado y terroristas, lo que refuerza la justificación de la participación de los militares. Si bien está diseñado para ser una medida a corto plazo que duraría 30 días, el estado de excepción se ha renovado prácticamente sin disidencia cada mes desde que se promulgó.

En Guatemala, después de años de ataques contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ordenada por la ONU, el gobierno del presidente Jimmy Morales cerró la Comisión en septiembre de 2019. Morales desplegó al ejército, y sus vehículos blindados donados por Estados Unidos, para amenazar la misión de la CICIG a medida que la Comisión se acercaba a investigar a los familiares del presidente y otros casos sensibles. El fin de la CICIG condujo al rápido resurgimiento de la influencia militar abierta y al desmantelamiento del poder judicial independiente centrado en la oficina del fiscal general.

En Honduras, el golpe militar de 2009 que derrocó a Mel Zelaya como presidente, marcó el comienzo de la era de dominio de Juan Orlando Hernández, quien provenía de una familia de élites militares y tenía varios familiares en las fuerzas armadas. Primero como presidente del Congreso y luego como presidente durante dos mandatos, Hernández empoderó a los militares para que firmaran parte de una empresa criminal en funcionamiento y profundamente inmiscuida en el tráfico hemisférico de drogas.

Durante gran parte de su tiempo en el poder (2014-2022), Hernández fue un firme aliado de Estados Unidos. Las administraciones estadounidenses proporcionaron a su gobierno cientos de millones de dólares en ayuda militar a pesar de los informes muy conocidos y creíbles de que él y los líderes

militares estaban involucrados en el tráfico de cocaína. En abril de 2022, pocas semanas después de dejar el cargo, fue extraditado a los Estados Unidos, donde enfrenta cargos por "participación en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos". (Departamento de Justicia 2022).

Cuando Daniel Ortega regresó al poder en Nicaragua en 2007 después de 17 años en la oposición, se movió constantemente para reafirmar el dominio militar. Una serie de elecciones fraudulentas le dieron a él, a su vicepresidenta y esposa Rosario Murillo el control de los tres poderes del gobierno. Ortega actuó agresivamente para usar a los militares para controlar la disidencia interna, más visiblemente durante las protestas antigubernamentales que estallaron en abril de 2018. Unos 330 manifestantes fueron asesinados por las fuerzas de seguridad, incluidos el ejército, la policía y las milicias civiles respaldadas por el ejército, cuando Ortega actuó para sofocar los disturbios. (Robles, 2018). Desde entonces, con apoyo militar, Ortega ha actuado agresivamente para encarcelar a todos sus opositores políticos, cancelar todos los medios independientes y sofocar a la sociedad civil no alineada con su régimen.

Remilitarización y vínculos con la ruptura

Hay múltiples impulsores subyacentes del resurgimiento de los militares en la región que son los diferentes países que tienen en común. El resultado ha sido que la remilitarización y la violencia en curso han proporcionado una enorme serie de acciones y reacciones que se refuerzan a sí mismas y que benefician enormemente tanto a las élites políticas/económicas como a los militares a través de una serie de redes de corrupción.

Como Sarah Chayes ha señalado específicamente sobre Honduras pero que puede aplicarse a cada país en este estudio,

Ya no es posible pensar en la corrupción como acciones inicuas de individuos, ya sea personas que dan sobornos a nivel callejero, funcionarios gubernamentales o ejecutivos de negocios ... La corrupción es el sistema operativo de redes sofisticadas que vinculan a los sectores público y privado y a los delincuentes descarados, incluidos los asesinos, y cuyo objetivo principal es maximizar los rendimientos para los miembros de la red. La corrupción está integrada en el funcionamiento de las instituciones de esos países. Y, al igual que las organizaciones criminales que se enhebran a través de sus tejidos, las redes cruzan las fronteras internacionales. Intercambiando favores y estableciendo cabezas de puente con socios y proveedores de servicios en todo el mundo, podrían considerarse redes cleptocráticas transnacionales. (Chayes, 2017).

Estos factores incluyen:

- El fracaso de las élites políticas en la posguerra para abordar los problemas de corrupción endémica sin ejecutar plenamente las reformas previstas del ejército. Esto dejó tanto a la élite tradicional como a la emergente con la opción de atraer a los militares para proteger sus estrechos intereses políticos y económicos;
- La falta de claridad en las leyes de cada país que hacen que la utilización de los militares sea ambigua y contradictoria, a menudo creando estructuras de inteligencia superpuestas y

estructuras de mando conjunto que los militares aprovecharon mientras marginaban a las fuerzas policiales nuevas e inexpertas;

- No hacer cumplir, desde el comienzo de la era de la posguerra, los límites establecidos constitucionalmente sobre los roles que los militares podrían tener legalmente en el orden público y la seguridad interna, estableciendo precedentes ambiguos desde el inicio para ignorar las reglas.
- El uso deliberado de "medidas temporales" legalmente aprobadas que deben adoptarse en circunstancias excepcionales como políticas permanentes que se integran en el sistema. Esto incluye los constantes decretos de "estado de emergencia" y "estado de excepción" que se renuevan regularmente sin debate ni explicación;
- El surgimiento de nuevos actores violentos como la pandilla transnacional MS-13 (Mara Salvatrucha) y las estructuras de narcotráfico que presentaron desafíos significativos para las fuerzas policiales nuevas y poco capacitadas;
- La respuesta pavloviana de llamar a los militares cuando aumenta la violencia, facultando así a la institución para participar en la seguridad interna independientemente de las prohibiciones o limitaciones constitucionales. El aumento de la violencia ahora conduce, casi inevitablemente, a un aumento de los presupuestos militares, lo que se traduce en un aumento del poder militar.

Cuando la violencia aumenta, como lo hizo en el Triángulo Norte con el surgimiento de pandillas y grupos de narcotraficantes, la respuesta inmediata fue llamar a los militares en lugar de abordar los problemas socioeconómicos subyacentes para proporcionar soluciones a largo plazo. La dependencia de los militares en lugar de abordar los problemas socioeconómicos subyacentes ha llevado a una política impulsada por el entendimiento de que las soluciones a los crecientes problemas sociales y las altas tasas de criminalidad son un problema de ocupación territorial por parte de las fuerzas estatales, lo que lleva a más violencia y minimiza el impacto potencial de las iniciativas políticas no violentas.

En la ausencia deliberada de datos y la retención de información, el principal punto de referencia se ha convertido en las tasas de homicidio, entre las más altas del mundo, pero muy por debajo a diferencia de hace cinco años. Esto en una métrica imperfecta en el mejor de los casos, dado que en todos los países que se estudiaron en este informe, los gobiernos eliminaron deliberadamente los datos y reprimieron los análisis que cuestionarían la efectividad del uso de los militares para reducir la violencia.



Figura 7: Relación simbiótica de militares y élites en Centroamérica

Como señaló la ONUDD, el tráfico de cocaína en Centroamérica no mata a la gente, sino que la lucha por los territorios por los que pasa y se transporta la droga causa violencia. (ONUDD, 2012). Por lo tanto, la disminución de los homicidios es frecuentemente un indicador de la consolidación territorial por parte de un grupo criminal o pandilla, lo que lleva a una menor necesidad de infligir violencia continua, en lugar de abordar los verdaderos impulsores de la violencia.

En cada país, el ejército está cada vez más involucrado con el crimen organizado transnacional, en particular el tráfico de drogas, lo que aumenta la necesidad de control territorial por parte de las fuerzas armadas. De hecho, esta es la justificación e implementación subyacente del "Plan de Control Territorial" de la administración Bukele, las fuerzas de tarea conjuntas establecidas con el apoyo de Estados Unidos en Honduras y Guatemala y extensos despliegues militares en Honduras.

Hay otro beneficio de dejar a los militares como único mecanismo de procuración de justicia. Por cada nueva obligación impuesta a los militares, necesitan más recursos y nuevas garantías de impunidad para llevar a cabo las nuevas tareas. Muchas de estas tareas son manifiestamente inconstitucionales y requieren de la manipulación del sistema judicial. Existen numerosas oportunidades de corrupción entre la compra de nuevos equipos, el aumento de la nómina y los aumentos repentinos de fondos facilitados por los legisladores y las agencias gubernamentales encargadas de financiar y comprar el equipo. Estas compras a menudo utilizan fondos o proveedores estadounidenses.

A medida que las redes operativas de redes sofisticadas se unían entre sí, como lo describe Chayes, se hizo más conveniente para todas las partes abandonar la búsqueda de soluciones reales que sean complejas, costosas y de largo plazo, y recurrir a promover su propio interés manteniendo el sistema en funcionamiento.

Todas estas tendencias son posibles gracias al patrón actual de participación regional de Estados Unidos, en el que Estados Unidos continúa exigiendo el control militar del narcotráfico de y los flujos migratorios ilegales sin insistir igualmente en el control civil de los militares o en el fortalecimiento de las instituciones policiales y judiciales.

Los impactos de la remilitarización van mucho más allá de las poblaciones más visibles, para impactar desproporcionadamente a las comunidades indígenas marginadas, los miembros de las comunidades LGBTQ+ y las personas que viven en comunidades rurales y urbanas vulnerables.

En El Salvador, el aumento de la militarización afecta a las personas detenidas por la policía y las fuerzas armadas, a los jóvenes y, en algunos casos, a pueblos enteros. El registro de denuncias de El Salvador por presuntas violaciones de derechos humanos perpetradas por las Fuerzas Armadas mostró un aumento constante de denuncias entre 2009 y 2016, el año más reciente del que se tienen datos. Los asesinatos extralegales, los homicidios desproporcionados cometidos por agentes de la ley y por parte de la policía también han aumentado en frecuencia. El uso de los militares para hacer cumplir el confinamiento por COVID-19 mediante la ocupación de ciudades y la imposición de toques de queda, en contra de las recomendaciones de los epidemiólogos, provocó malos tratos, extorsiones, lesiones físicas y amenazas bajo la emergencia pandémica.

En Guatemala, el incremento en las funciones e influencia de los militares afecta desproporcionadamente a las comunidades indígenas y municipios que viven cerca de minas comerciales, como en el Estado de Sitio impuesto a El Estor, Izabal. También afecta a las comunidades que viven en áreas con una presencia significativa del narcotráfico y a las poblaciones como las caravanas de migrantes, en ambos casos al suponer que los cargos penales se aplican a los ciudadanos que se encuentran en contextos con presencia estatal limitada. Muchas personas en caravanas de migrantes tienen la intención de buscar asilo fuera de sus países de origen, lo que indica vulnerabilidades superpuestas e interseccionales que los dejan en un riesgo aún mayor.

En Honduras, la creciente dependencia de los militares y sus tácticas para responder a los desafíos de seguridad pública afecta desproporcionadamente a las comunidades en Gracias a Dios, Olancho y a lo largo del Mar Caribe. Las comunidades indígenas y los activistas ambientales enfrentan amenazas significativas mientras abogan por los derechos de la tierra ganados con tanto esfuerzo contra los deseos del grupo oligárquico de familias poderosas. Los problemas sistémicos en la sociedad, como la violencia contra las mujeres, el acoso dirigido a las personas LGBTQ+ y el comportamiento machista, también se manifiestan en el acoso a estas comunidades por parte de los militares y otras fuerzas de seguridad.

Como muestran los investigadores en estos estudios, comenzando con El Salvador, luego pasando a Guatemala, Nicaragua y Honduras, la región está cerca de un punto de inflexión más allá del cual recuperar incluso los frágiles y defectuosos procesos democráticos tomará décadas y enormes recursos para lograrlo. Esto no solo sería una tragedia para la región, que aún se está recuperando de los conflictos que desgarraron a sus sociedades en las guerras, la represión y la exclusión, sino también para los intereses estratégicos de Estados Unidos y la estabilidad del hemisferio occidental.

Como hemos visto con los fenómenos del populismo radical de izquierda y derecha, el resurgimiento del autoritarismo y la creciente ola de migración hemisférica (en lugar de solo centroamericana), lo que sucede en una parte del hemisferio tiene un impacto directo en las otras partes.

Cuando la tendencia de hacer retroceder la influencia militar y construir instituciones civiles estaba en aumento, creció hasta engullir la mayor parte del hemisferio. Lo contrario también es cierto. A medida que Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala muestren la viabilidad de volver a las estructuras del pasado, las lecciones se aprenderán y se copiarán a gran escala. Es una tragedia inminente que debe abordarse en todos los niveles, ya sea a nivel local, nacional y más allá.

Referencias

Arana, Ana. 2005. "How Street Gangs Took Central America". *Foreign Affairs* 84-3: 98-110. Último acceso: 30 de marzo de 2019, en: <https://www.foreignaffairs.com/articles/central-america-caribbean/2005-05-01/how-street-gangs-took-central-america>.

Chayes, Sarah, "When Corruption is an Operating System: The Case of Honduras", Carnegie Endowment for International Peace, 2017, consultado en: <https://carnegieendowment.org/2017/05/30/when-corruption-is-operating-system-case-of-honduras-pub-69999>

Departamento de Justicia, "Juan Orlando Hernández, Ex Presidente de Honduras, Extraditado a los Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas y armas de fuego", Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, 21 de abril de 2021, consultado en: <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/juan-orlando-hernandez-former-president-honduras-extradited-united-states-drug>

Farah, Douglas y Kathryn Babineau. 2018. "La evolución de la EM 13 en El Salvador y Honduras; De pandillas a amenazas de primer nivel para Centroamérica y los problemas de seguridad de Estados Unidos". *The Perry Center Occasional Paper*, un artículo consultado en: https://www.williamjperrycenter.org/sites/default/files/publication_associated_files/The%20Rapid%20Evolution%20of%20the%20MS13%20in%20El%20Salvador%20and%20Honduras_0.pdf

Consejo de Seguridad Nacional, "Estrategia de Estados Unidos para abordar las causas fundamentales de la migración en Centroamérica", The White House, julio de 2021, consultado en: <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/07/Root-Causes-Strategy.pdf>

Ribando Seelke, Clare. 2016. "Pandillas en Centroamérica." *Servicio de Investigación del Congreso*. Último acceso: 26 de marzo de 2019, consultado en: <http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL34112.pdf>

Robles, Frances, "In Nicaragua, Ortega was on the Ropes. Now, he has Protesters on the Run", *The New York Times*, 24 de diciembre de 2018, consultado en: <https://www.nytimes.com/2018/12/24/world/americas/nicaragua-protests-daniel-ortega.html>

"Transnational Organized Crime in Central America and the Caribbean: A Threat Assessment," Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, septiembre de 2012, consultado en: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/TOC_Central_America_and_the_Caribbean_english.pdf

"Estrategia de Estados Unidos para contrarrestar la corrupción", La Casa Blanca, diciembre de 2021, consultado en: <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/12/United-States-Strategy-on-Countering-Corruption.pdf>

"Estrategia de seguridad nacional", La Casa Blanca, octubre de 2022, consultado en: <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf>